

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, dos (2) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral promovido por IGNACIO ANTONIO DUQUE MORA contra el INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA S.A. (Radicado 05001-31-05-001-2018-00647-01).

### ANTECEDENTES

La parte demandante radicó el escrito inicial con el propósito que se disponga la existencia de un vínculo de trabajo ejecutado entre el 15 de marzo de 2005 y el 20 de marzo de 2013, antecedida de un contrato por prestación de servicios desde el 13 de septiembre de 2004, para en consecuencia y previo a la declaratoria de nulidad del acuerdo de transacción celebrado entre las partes y el análisis de cara al salario percibido por sus pares, obtener el pago de las prestaciones sociales y vacaciones no reconocidas, el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones, las sanciones moratorias, las devoluciones de valores retenidos, y de ahí, obtener la reliquidación de su pensión de vejez debidamente indexada.

Una vez notificada en debida forma el libelo, la parte opositora INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA S.A., señaló haber existido con el demandante un contrato por prestación de servicios entre el 13 de septiembre de 2004 y el 30 de marzo de 2009 donde era ausente la subordinación, ya que la única condición era la prestación del servicio por 20 horas semanales, de donde era el actor quien elegía los días, los turnos y las horas, y solo para el 01 de abril de 2009 se suscribió un contrato de trabajo, por lo que antes no se adeudan prestaciones sociales ni aportes a la seguridad social. Agregó que la transacción celebrada fue voluntaria y espontánea, sin vicios en el consentimiento, por lo que es un documento absolutamente válido, ya que no afectó derechos ciertos e indiscutibles y se trató de un acuerdo de igual a igual porque el demandante fue socio del Instituto entre 1996 y el 2018. Agregó que la diferencia suscitada con el compañero Méndez Cedeño que narra se debe a que era una persona que laboraba 40 horas semanales, quien para el año 2005 ya contaba con 7 años de antigüedad. Como medios de defensa propuso la excepción previa de cosa juzgada y de mérito las que denominó falta de causa para demandar, inexistencia del contrato de trabajo, existencia de contrato de prestación de servicios, cosa juzgada, compensación, prescripción, buena fe de la accionada, mala fe del demandante y pago.

En la audiencia del artículo 77 del CPTSS celebrada el 25 de octubre de 2021 la *a quo* dispuso dar resolución a la cosa juzgada propuesta como previa al momento de proferir sentencia.

Surtido el trámite de rigor, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín en decisión que emitió el 12 de septiembre de 2022 DECLARÓ probada la excepción de cosa juzgada y ABSOLVIÓ a la demandada de todas las pretensiones de la demanda. CONDENÓ en costas al demandante, fijando las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

La Sala en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conoce del asunto por el grado de

consulta en favor del demandante por resultarle la decisión plenamente desfavorable sin que fuera atacada la decisión por recurso alguno.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

A partir del tema objeto de consulta, le corresponde a esta Colegiatura dilucidar como primera cuestión si se configura o no una cosa juzgada que de lugar a dar razón a la directora inicial del trámite en cuanto absolvió de lo pedido en virtud a la transacción celebrada entre los intervinientes del trámite.

Pues bien, como se sabe, la existencia de la cosa juzgada se determina, entre otras posibilidades, cotejando una transacción que ha hecho tránsito a cosa juzgada con otro proceso, para reconocer en ellos una triple identidad: de objeto, cuando ambos versen sobre la misma pretensión, de causa, cuando tengan como sustento los mismos fundamentos o hechos jurídicos, y de partes, que implica la concurrencia al proceso de las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada (artículo 303 del CGP).

Por tanto, para que pueda afirmarse la existencia de esta figura jurídica se exige de manera perentoria y categórica, la presencia de esas tres identidades básicas.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral al ocuparse de esta figura ha anotado:

*“La razón de ser de la cosa juzgada está en la necesidad de ponerle fin a los conflictos, impedir su sucesivo replanteamiento por la parte desfavorecida y evitar así la incertidumbre en la vida*

*jurídica. Ella tiene una función o eficacia negativa, como es la prohibición a los jueces para decidir sobre lo ya resuelto, esto es la inmutabilidad, y una función o eficacia positiva, como es la seguridad o definitividad que les otorga a las relaciones jurídicas sobre las que versa la decisión...” (Ver SL1199-2021)*

En ese contexto, se tiene que su propósito primigenio es evitar mantener indefinidamente en el tiempo la expectativa en torno al sentido de la solución judicial a un conflicto, y reabrir un debate para resistir decisiones verificadas en otra instancia judicial o dentro de un acuerdo conciliatorio o transaccional, resoluciones que entonces resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, además que prestan mérito ejecutivo.

Aun con ello, el acuerdo celebrado puede atacarse de existir causas de nulidad que lo invaliden y una vez demostradas, su contenido pierde toda validez.

En este asunto, es indiscutida la suscripción del pacto de transacción entre los que integran este litigio, y siendo que el promotor del juicio cuestiona su eficacia, es de trascendencia precisar que una transacción para tener la entidad de extinguir obligaciones y poner fin a un derecho de contenido dudoso o a una relación jurídica incierta *-artículos 1625 y 1469 C.Civil-* debe cumplir con la totalidad de requisitos que la Corte Suprema de Justicia en nuestra especialidad ha enlistado, y que son: i) la existencia de un derecho litigioso, eventual o pendiente de resolver; ii) se trata de un derecho que no tiene la connotación de cierto e indiscutible porque no hay certeza sobre su dimensión y no se ha configurado una consecuencia jurídica<sup>1</sup>; iii) hay ausencia de vicios del consentimiento, pues no se alega siquiera de parte del promotor de la litis que se presentara al momento de la rúbrica del convenio error, fuerza o dolo, y iv) lo acordado propicia generar concesiones recíprocas y mutuas para las partes (Ver AL607-2017, AL1761 y SL4243-2022).

---

<sup>1</sup> T-040 de 2018.

En ese campo, dado el límite en el respeto a los derechos mínimos, ciertos e indiscutibles del trabajador, debe decirse que estos son entendidos como aquellos que se han configurado por haberse cumplido los supuestos de hecho que determinan las normas que los consagran, por lo que para que pierda esa connotación, esto es, que un derecho sea discutible y, por ende, susceptible de ser negociado, no basta con que el empleador lo cuestione en el llamado judicial, de manera tal que cualquier beneficio o garantía pueda ser renunciado por el trabajador, so pretexto de que el empleador controvierta su nacimiento, por lo que, se ha señalado, que *“...un derecho será cierto, real, innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay ningún elemento que impida su configuración o su exigibilidad...”* (Ver SL4464-2014 y SL1639-2022).

De ese modo, objetivamente examinado el contrato de transacción que entre las partes se sostuvo (págs. 50-53 Archivo01), se tiene que los contendientes acudieron a este instrumento como un acuerdo amigable a fin de procurar la mayor seguridad jurídica en la relación legal de carácter civil sostenida entre el 13 de septiembre de 2004 y la fecha de suscripción que corresponde al 07 de abril de 2009, y evitar eventuales litigios que se puedan instaurar para pretender el reconocimiento de derechos por la naturaleza laboral que podría remotamente considerarse, así como las indemnizaciones y demás consecuencias que jurídicamente pudieran derivar de la relación contractual.

De la lectura completa del documento, el articulado transcrito y las circunstancias que rodearon su suscripción, se denota que la voluntad de los intervinientes fue a partir del oficio que desarrolló el actor desde el 13 de septiembre de 2004 para el Instituto demandado, y ante el advenimiento de una contratación de índole laboral a partir del 01 de abril de 2009 (Págs. 47-49 Archivo 01), se pactó que la naturaleza de tipo civil que siempre rigió el período previo, sería la calidad catalogada para todos los efectos, con lo que se propuso impedir cualquier discusión jurídica para el futuro frente a

acreencias laborales derivadas del servicio prestado por el señor Duque Mora.

Lo anterior revela que por disposición expresa y voluntad de las partes, quienes bajo la autonomía de la voluntad determinaron el alcance del convenio, se deseó dejar saldados todos los compromisos respecto de las responsabilidades de tipo laboral que pudieran surgir de la prestación del servicio suscitado previo al 01 de abril de 2009, con la convicción y la precisión de estar ante un contrato civil, hallando en ese contexto satisfechos los requisitos que para la validez del acuerdo son requeridos puesto que se está ante una cuestión pendiente por resolver, se trata de derechos inciertos y discutibles ya que existe una falta de certeza del derecho como presupuesto de la transacción para el momento de la celebración del acuerdo (Ver SL4657-2021), no se alega ni se refuta la presencia de vicios en el consentimiento de algunos de los suscriptores, y tal pacto dio lugar a aquiescencias mutuas.

Es preciso anotar que los sujetos contractuales deben asumir con seriedad la suscripción de un acuerdo conciliatorio o transaccional y tener en cuenta la importancia de que al hacerlo estén totalmente seguros de su contenido y, particularmente, de sus consecuencias, encontrando del contenido del documento plena claridad en su propósito.

De modo que confrontada la transacción que nos ocupa, debe decirse que la misma está cubierta de validez, la que claramente envuelve cualquier emolumento laboral, siendo esa la causa de lo que nos convoca en el presente litigio, sin que pueda advertirse a simple vista que la relación de los contratantes fue una distinta a la descrita en el acuerdo, con lo que se estén convirtiendo en dudosos los derechos del convocante, ni se está invirtiendo el orden de los principios, dogmas e instituciones sobre los que se edifica el derecho tuitivo laboral y de seguridad social, especialmente, el de prevalencia de la realidad sobre las formas, sino que como el asunto versa sobre unos derechos derivados de un conflicto sobre contrato

realidad, son derechos que, por la naturaleza del tema debatido, son perfectamente transigibles porque existe una incertidumbre sobre la relación jurídica y en ese orden, sobre las pretensiones o expectativas a negociar y por consiguiente, no existe obstáculo para su aprobación y darle los efectos propios de cosa juzgada frente a los litigantes (Ver AL227-2021), con lo que la judicatura queda relegada de la posibilidad de volver a debatir lo que ya fue definido por voluntad de las partes, pues debe darse fuerza vinculante a la transacción en la que concurren de cara a este trámite judicial la identidad de personas, identidad de la cosa pedida e identidad de la causa.

Es preciso advertir que no es posible hablar de una persona vulnerable en su condición de trabajador que debió suscribir el acuerdo en las condiciones que allí se anotan para dar permanencia a su vínculo o permitir su contratación bajo la modalidad laboral indefinida que en efecto se presentó, porque no cabe duda que el señor Ignacio Antonio Duque Mora fungió como socio accionista de la sociedad convocada a este juicio desde el 30 de diciembre de 1996 (Págs. 207-212 Archivo 01) como bien fue aceptado en el interrogatorio de parte absuelto, anunciando como fecha final de esta calidad el año 2014 aproximadamente, dejándose evidente que el actor en relación con la demandada acorde al conjunto probatorio escrito tuvo una triple calidad: de prestador de servicios bajo el amparo de la normatividad civil, trabajador sometido a la legislación laboral, y de socio o accionista cuyo status es regulado por el derecho societario, condición última de donde resulta desatinado pregonar que el acuerdo le fue impuesto, a más que esa calidad innegable impone que la responsabilidad de su contratación le sea atribuible, porque al contar con la posibilidad de incidir en decisiones de índole administrativo y de gestión que corresponden a los órganos ejecutivos, era de suyo el conocimiento de la administración, las estrategias adoptadas y la gestión de la contratación (Ver SL845-2021, SL845-2022), de ahí la imposibilidad de dar razón a este argumento para restar eficacia al pacto que se entiende fue suscrito bajo rasgos de libertad, voluntad y conocimiento.

En ese orden, ningún error cometió la falladora de la primera instancia por haber inferido que en razón de la transacción celebrada entre las partes se le da el alcance de cosa juzgada y en ese orden, el fin del presente asunto se remonta es a la data de la transacción quedando la pasiva liberada de la responsabilidad que hoy se busca sea impuesta dándose lugar a la absolución emitida que conlleva a que la providencia sea confirmada.

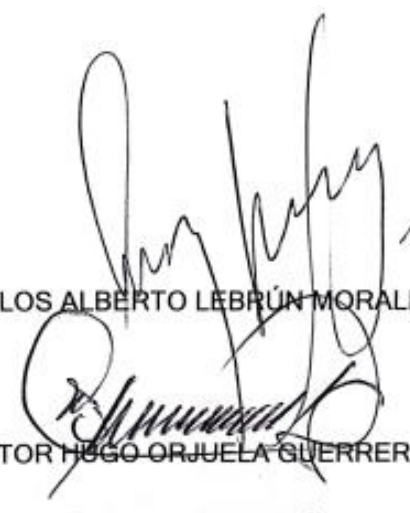
Por el grado de consulta, no se causaron costas en esta instancia.

### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de consulta de fecha y procedencia conocidas. Sin costas.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (numeral 3° del literal d, del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y AL2550-2021, CSJ).

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA  
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

<b>Radicación:</b>	<b>05001310500120180064701</b>
<b>Proceso:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL</b>
<b>Demandante:</b>	<b>IGNACIO ANTONIO DUQUE MORA</b>
<b>Demandado:</b>	<b>INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.S.</b>
<b>M. P.</b>	<b>CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES</b>
<b>Fecha de fallo:</b>	<b>2/08/2023</b>
<b>Decisión:</b>	<b>CONFIRMA</b>

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 3/08/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario